Bogotá, D. C., julio de 2022

Señor

**Jaime Luis Lacouture**

Secretario General

Cámara de Representantes

**Asunto**: Presentación del Proyecto de Ley “Por medio del cual se protegen los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a salud promoviendo buenas prácticas de cuidado, reducción de riesgos y mitigación de daños en los usos y consumos de sustancias psicoactivas en el territorio nacional”.

Respetado Secretario,

En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 219 de la Ley 5ª de 1992, presentamos a consideración del Congreso de la República el Proyecto de Ley “Por medio del cual se protegen los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a la salud promoviendo buenas prácticas de cuidado, reducción de riesgos y mitigación de daños en los usos y consumos de sustancias psicoactivas en el territorio nacional”, con el fin de surtir el respectivo trámite legislativo. Por tal motivo, adjuntamos original en formato PDF con firmas, en PDF sin firmas, y en formato Word sin firmas

Cordialmente,

|  |  |
| --- | --- |
| **DANIEL CARVALHO MEJÍA**  Representante a la Cámara por Antioquia | **HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA**  Senador de la República  Coalición Alianza Verde Centro Esperanza |
| **JUAN CARLOS LOZADA VARGAS**  Representante a la Cámara por Bogotá  Partido Liberal Colombiano | **JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ GONZÁLEZ**  Representante a la Cámara por Caldas  Nuevo Liberalismo |
| **JENNIFER PEDRAZA SANDOVAL**  Representante a la Cámara por Bogotá  Partido Dignidad | **JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES**  Representante a la Cámara por Boyacá  Partido Alianza Verde |
| **KATHERINE MIRANDA**  Representante a la Cámara  Partido Alianza Verde | **ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  Representante a la Cámara por Risaralda  Partido Alianza Verde |
| **DUVALIER SÁNCHEZ ARANGO**  Representante a la Cámara por el Valle del Cauca  Partido Alianza Verde | **OLGA LUCÍA VELÁSQUEZ**  Representante a la Cámara Bogotá  Partido Alianza Verde |
| **CRISTIAN DANILO AVENDAÑO FINO**  Representante a la Cámara Santander  Partido Alianza Verde | **ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA**  Representante a la Cámara  Partido Alianza Verde |
| **JULIA MIRANDA LONDOÑO**  Representante a la Cámara por Bogotá  Partido Nuevo Liberalismo |  |

PROYECTO DE LEY \_ DE 2022   
  
*“Por medio del cual se protegen los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a salud promoviendo buenas prácticas de cuidado, reducción de riesgos y mitigación de daños en los usos y consumos de sustancias psicoactivas en el territorio nacional”*

**\* \* \***

**El Congreso de Colombia**

**DECRETA**

# CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

**ARTÍCULO 1°. Objeto.** Proteger los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la salud de los colombianos conforme a la Constitución Política de Colombia y a través de disposiciones y acciones que le permitan al Estado, a los individuos y a la sociedad promover buenas prácticas de cuidado, reducir riesgos y mitigar daños en los usos y consumos de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en el territorio nacional.

**ARTÍCULO 2° Principios.** La presente ley y las disposiciones que deriven de ella, deberán enmarcarse en los siguientes principios:

1. **Respeto al derecho al Libre desarrollo de la personalidad**. El Estado deberá garantizar el derecho al Libre desarrollo de la personalidad y a la autodeterminación del individuo sin imponer una visión particular sobre lo que le conviene o no realizar en su fuero personal siempre y cuando no afecte los demás bienes tutelados por la constitución y la ley.
2. **Respeto a la dignidad humana.** La aplicación de esta ley y todas las disposiciones que deriven de ella, deberán respetar a la dignidad humana del individuo, del grupo o de las comunidades que haga parte. Por ninguna circunstancia, la o las personas, grupos, poblaciones o comunidades, sea cual fuere su circunstancia o condición particular, merecerán un trato que viole su dignidad humana.
3. **Derecho a la no discriminación.** Esta ley buscará, en todo caso, prevenir cualquier discriminación que vulnere el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Los sujetos referidos en esta ley deberán gozar del derecho a la no discriminación sin ningún condicionamiento y el Estado propenderá por la salvaguarda de su dignidad y la desestigmatización social por la condición de usuarios y/o consumidores de las sustancias aquí referidas.

1. **Derecho a la salud.** El Estado deberá garantizar el derecho a la salud a través de disposiciones que promuevan prácticas de cuidado, reduzcan los riesgos, mitiguen los daños y garanticen el acceso a los servicios de salud para las personas usuarias de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas cuando estos los requieran o lo soliciten.  
     
   El consumo problemático de estas sustancias deberá tener un tratamiento especial de salud pública para la mitigación de sus efectos nocivos para el individuo y la sociedad.
2. **Confidencialidad y anonimato**. La aplicación de esta ley y las disposiciones que deriven de ella deberán garantizar la confidencialidad, el anonimato y el respeto por el derecho al buen nombre de las personas usuarias de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas.

El Estado deberá establecer mecanismos que garanticen la confidencialidad de quién así lo desee. Así como la protección de sus datos e información personal y privada sobre el estado de su salud y su condición de persona usuaria de sustancias psicoactivas.

1. **Sujetos de protección especial.** Los niños, las niñas y adolescentes serán sujetos de protección especial de esta ley. Se seguirá restringiendo y previniendo el acceso, uso y/o consumo de sustancias psicoactivas por parte de las y los menores de dieciocho años. El Estado garantizará el goce efectivo de sus derechos especiales respecto a esta materia consagrados en la Constitución y la ley.
2. **Respeto a la diversidad y las prácticas culturales.** El Estado deberá respetar las prácticas culturales particulares relacionadas con el uso y consumo de sustancias psicoactivas. El respeto por estas prácticas no sólo se limitará a los contextos rituales de los pueblos indígenas, sino que será extensiva a las prácticas enmarcadas en la diversidad cosmogónica de todos los pueblos y comunidades que habitan la nación.
3. **Acciones basadas en la evidencia.** El desarrollo normativo de esta ley y su aplicación deberán estar enmarcados en la evidencia con fundamento científico, validado y evaluado por instituciones y autoridades competentes.  
     
   Este principio obligará al Estado a evaluar y reformular sus acciones en cuanto la evidencia y la sociedad lo consideren necesario.

1. **Acceso a la información y a la educación.** Los usuarios y consumidores de sustancias psicoactivas tendrán el derecho a educarse y acceder a información verás, confiable, actualizada y basada en la evidencia con fundamento científico sobre los tipos de sustancias psicoactivas, sus componentes químicos y los efectos biológicos, psicológicos, sociales y comportamentales que implica el uso y consumo de cada sustancia. Así mismo, la debida divulgación de información útil para reducir los riesgos y mitigar los daños que deriven del uso y consumo de las sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas.   
     
   La información relacionada construida y publicada por las entidades gubernamentales no deberá estar sesgada o condicionada para promover o estigmatizar el uso o consumo de sustancias psicoactivas. Su naturaleza deberá responder a los estándares de imparcialidad que el fundamento científico y la evidencia proponen.
2. **Trato diferencial y tipologías de uso y consumo de sustancias psicoactivas**. El diseño e implementación de políticas y programas que desarrollen la presente ley, deberán reconocer los distintos tipos de usos y consumos de sustancias psicoactivas, las distintas sustancias, sus derivados y los distintos tipos de personas usuarias de cada sustancia. Esto con el fin de contemplar tratos diferenciales de acuerdo con cada una de estas particularidades y se enfoquen esfuerzos institucionales en donde se considere necesario hacerlo.
3. **Participación de usuarios, consumidores, academia y sociedad civil.** Los diseños, implementación y evaluación de programas y políticas que desarrollen la presente ley deberán contar con la participación de las comunidades, las personas usuarias de sustancias psicoactivas en el país. Así mismo, se incluirá la participación de la sociedad civil organizada y la academia para que aporten sus visiones y posiciones frente al diseño, implementación y evaluación de estas políticas y acciones. Se reconocerá el valor y la importancia histórica, el conocimiento técnico y la experiencia acumulada de la sociedad civil organizada en materia de disminución de riesgos, mitigación de daños y buenas prácticas de cuidado en el uso y consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas.

**ARTÍCULO 3. Definiciones.** La presente ley se interpretará a la luz de las siguientes definiciones:

1. **Sustancias psicoactivas:** Las sustancias psicoactivas son compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso central generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento de la persona usuaria**.**
2. **Sustancias psicoactivas lícitas:** son aquellas sustancias psicoactivas que tienen una regulación en la legislación nacional para su producción, comercialización, venta y consumo. Dentro de estas están el alcohol y el tabaco.
3. **Sustancias psicoactivas ilícitas:** son aquellas sustancias psicoactivas que tienen un estatus de ilicitud y, por tanto, no contemplan una regulación en su producción, comercialización, venta y consumo en la legislación nacional. Estas están consideradas como estupefacientes de la lista I y II de la Convención única de 1961 sobre estupefacientes de Naciones Unidas.
4. **Buenas prácticas de cuidado:** son aquellas prácticas que, desde el ámbito médico y el conocimiento empírico, son consideradas como cuidadoras de la integridad del individuo en el uso y consumo de sustancias psicoactivas. Algunas buenas prácticas de cuidado incluyen el consumo abundante de agua potable, evitar consumir más de una sustancia a la vez, procurar consumir en espacios seguros, alimentarse bien antes, durante y después del consumo, contar con la compañía de una o más personas de confianza, entre otras.
5. **Reducción del riesgo:** es un enfoque encaminado a reducir los riesgos a la integridad del individuo consecuentes al consumir sustancias psicoactivas. Este enfoque asume que existen riesgos al realizar esta práctica, pero también acciones para ser reducidos. Como criterio de salud pública, la reducción del riesgo no busca el cese total y definitivo del uso de sustancias psicoactivas, sino lograr avances significativos en la calidad de vida de los individuos consumidores y el cuidado de su salud e integridad física.Tener información veraz, oportuna y adecuada, conocer el tipo de sustancia y sus efectos, tener certeza de la calidad de la sustancia, son algunas de las prácticas para reducir los riesgos.
6. **Mitigación del daño:** es un enfoqueencaminado a mitigar los daños que pueden ocasionar el consumo de sustancias psicoactivas. La mitigación del daño se enfoca en las acciones que puede realizar el individuo para salvar su integridad de una inminente situación altamente peligrosa. El acceso a protocolos de cuidado y el acceso a servicios de salud oportunos son algunas de las formas de mitigar el daño al momento de consumir sustancias psicoactivas.
7. **Lugares de habitual consumo:** son aquellos lugares, zonas y/o establecimientos en donde es habitual, por cultura, disponibilidad y oferta, el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. Estos lugares suelen ser: establecimientos nocturnos como: bares, discotecas, casinos, hoteles; conciertos, centros de eventos, festivales, fiestas tradicionales, playas, zonas de camping, entre otros.
8. **Persona usuaria**: persona mayor de dieciocho (18) años que, en su plena libertad individual, usa ocasional o regularmente, cualquier sustancia psicoactiva con fines recreativos, médicos, terapéuticos y/o rituales.
9. **Consumos ocasionales**: tipo de consumo de sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas que realiza una persona usuaria de manera ocasional para cualquier fin personal. Este consumo es característico por la recurrencia no definida de consumo de sustancias.
10. **Consumos funcionales**: tipo de consumo de sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas que realiza una persona usuaria sin que esto interfiera de manera negativa en la actividad funcional de su vida cotidiana en las esferas psicológicas, mentales, biológicas, sociales, laborales o en las que el individuo se desarrolle. Estos consumos pueden tener una recurrencia definida o indefinida como en el consumo ocasional.
11. **Consumos problemáticos:** tipo de consumo de sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas que realiza una persona usuaria en la que la actividad funcional de su vida cotidiana en las esferas psicológicas, mentales, biológicas, sociales, laborales o en las que el individuo se desarrolle se vean afectadas de manera negativa para sí mismo y/o para la sociedad que lo rodea. Estos consumos suelen estar acompañados de trastornos a causa de la farmacodependencia o dependencia emocional y deben ser categorizados y diagnosticados por profesionales de la salud.
12. **Consumos rituales:** tipo de consumo de sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas que realiza una persona usuaria en contextos rituales y/o espirituales en el marco de una cosmogonía particular.

# 

# CAPÍTULO II: RESPECTO AL DERECHO A TOMAR DECISIONES INFORMADO

**ARTÍCULO 4. Sobre el libre desarrollo de la personalidad y de tomar decisiones informado.** Se garantizará el derecho de toda persona que, sin perjuicio a losbienes jurídicos tutelados por la constitución y la ley**,** defina su libre desarrollo de la personalidad sin que el Estado imponga una visión particular sobre lo que está bien hacer o no en su órbita personal. Este derecho incluye la posibilidad de usar y/o consumir sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en el marco de la autonomía individual.

El Estado brindará herramientas para que el individuo, apelando a este derecho, tome decisiones con la información veraz, confiable, actualizada y basada en la evidencia científica que se considere necesaria. Así como buenas prácticas de cuidado, reducción del riesgo y mitigación del daño en sus usos y consumos.

**ARTÍCULO 5. Educación, información y prevención.** El Estado garantizará a los usuarios y consumidores información veraz, confiable, actualizada y basada en la evidencia con fundamento científico sobre los tipos de sustancias disponibles en el territorio nacional, su composición química y biológica y las recomendaciones para mitigar los daños y disminuir los riesgos que implica su consumo. Esta información deberá actualizarse de manera constante y progresiva, y le corresponderá al Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social y al Ministerio de Educación, las maneras adecuadas para la divulgación de esta información.

La información que sea producida por las entidades públicas deberá tener un enfoque de disminución del riesgo y mitigación del daño, así como información detallada sobre los tipos de sustancia y sus características particulares como composición química y los efectos en el cuerpo, la mente y el comportamiento de la persona usuaria, con el fin de prevenir su consumo o, si el individuo así lo decidiere, que su eventual consumo sea responsable conforme a la información actualizada disponible.

**Parágrafo**. La divulgación de esta información deberá abstenerse de sesgos estigmatizadores o cualquier calificativo que no esté basado en la evidencia científica para las personas usuarias y las sustancias psicoactivas referenciadas.

**ARTÍCULO 6. Sensibilización a la policía nacional.** El Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social deberán emitir guías y emprender acciones concretas para la sensibilización y formación a los miembros de la Policía Nacional sobre los derechos de las personas usuarias de sustancias psicoactivas y sobre buenas prácticas de cuidado para la disminución de los riesgos y mitigación del daño de los consumidores.

Los integrantes de la Policía Nacional deberán poseer información actualizada sobre los protocolos de cuidado, rutas de atención y procedimientos del Sistema de Alertas Tempranas que se implementen por parte de los entes territoriales de sus áreas de operación.

**ARTÍCULO 7. Información sobre las sustancias reguladas.** Toda regulación a cualquier sustancia psicoactiva que esté vigente o entre en vigencia a partir de la aprobación de la presente ley, deberá contemplar acciones propias a la entrega de información confiable, veraz, actualizada y basada en la evidencia con fundamento científico sobre los componentes químicos y biológicos de la sustancia en cuestión, así como los efectos en la conducta, en el organismo y en la actividad cognitiva del individuo, los riesgos asociados a su uso y consumo y las recomendaciones para mitigar los posibles daños de un consumo problemático.

Le corresponderá a quien comercialice, suministre y/o provee estas sustancias tener disponible esta información de manera clara y concisa en la venta del producto para que el usuario tenga la información pertinente al momento de decidir su consumo.

**ARTÍCULO 8. Información para el cuidado en lugares de habitual consumo.** Los sitios donde es habitual el consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas como establecimientos públicos nocturnos, bares, discotecas, hoteles, casinos y eventos masivos como festivales, fiestas patronales y tradicionales, conciertos, zonas de campamento, entre otros, deberán tener visible una infografía básica sobre prácticas de cuidado, disminución del riesgo, mitigación del daño y rutas de atención temprana para casos de consumo problemático de todo tipo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas.

Esta infografía deberá ser diseñada por el Ministerio de Salud y el cumplimiento de su disponibilidad será vigilado por el Ministerio del Interior y las entidades reguladoras.

**Parágrafo:** el incumplimiento de este artículo por parte de los establecimientos públicos o de las organizaciones o empresas operadoras de eventos masivos conllevará a una posible sanción establecida por las entidades regulatorias.

**ARTÍCULO 9. Trazabilidad de las sustancias.** Toda regulación a las sustancias psicoactivas que esté vigente o entre en vigencia a partir de la aprobación de la presente ley deberá contemplar protocolos de trazabilidad de sustancias en el que sea verificable el origen y los estándares de calidad con la que fuese producida, transportada, comercializada y/o suministrada.

Los protocolos de trazabilidad establecidos deberán contener mecanismos de seguimiento e información disponible para usuarios y consumidores.

**ARTÍCULO 10. Observatorio de drogas de Colombia.** Fortalezcase el Observatorio de Drogas de Colombia. El observatorio tendrá las funciones de las siguientes funciones:

1. Mantener actualizada la información sobre los diferentes tipos de sustancia que circulan lícita o ilícitamente en el territorio nacional considerando sus características particulares, sus usos individuales y sociales, el tipo de consumidores, su composición química y los posibles riesgos en su uso y consumo.
2. Convocar a las instituciones, públicas y/o privadas, de la sociedad civil, entidades de salud, universidades y la comunidad interesada en la investigación sobre los usos y consumos de las sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas para coordinar acciones conjuntas, compartir información relevante y actualizar los estados de circulación y consumo de los diferentes usos y consumos de las sustancias psicoactivas en el territorio nacional.
3. Establecer el Sistema de Alertas Tempranas que permita activar rutas para la mitigación de daños, disminución de riesgos químicos y asuntos concernientes a la convivencia y la seguridad.
4. Publicar y divulgar un informe periódico de usos y consumos de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, así como un informe sobre las sustancias en circulación en el territorio nacional. Estos informes tendrán como fin el conocer el estado de los usos y consumos de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, alertar sobre los posibles riesgos químicos que estén en circulación, monitorear y actualizar información sobre Nuevas Sustancias Psicoactivas, revisar los avances en materia de reducción de riesgos y mitigación daños y enfocar esfuerzos territoriales de política pública.

**ARTÍCULO 11. Sistema de alertas tempranas:** Fortalezcase el Sistema de Alertas Tempranas o SAT como el mecanismo de intercambio de información creado con el fin de mitigar y reducir el impacto de las drogas emergentes a partir de la oportuna detección, evaluación del riesgo y generación de información confiable dirigida a las autoridades relacionadas y la comunidad en general.

El Sistema de Alertas Tempranas deberá coordinar la red multidisciplinaria de organizaciones de la sociedad civil, Secretarías de Salud territoriales, entidades prestadoras de salud, universidades y demás actores que representan importantes fuentes de información territorial y descentralizada sobre el fenómeno de las sustancias psicoactivas, su comportamiento en las prácticas de consumo y los riesgos químicos emergentes en el territorio nacional.

El SAT deberá contar con mecanismos de actualización de información eficaces que permitan la toma oportuna de decisiones por parte de las entidades territoriales y el intercambio de conocimiento e información sobre nuevas sustancias psicoactivas y riesgos químicos emergentes con la red multidisciplinaria territorial y descentralizada de organizaciones de la sociedad civil y demás instituciones interesadas.

# CAPÍTULO III: RESPECTO A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES

**ARTÍCULO 12. Tipificación de usuarios y consumidores.** El desarrollo de la presente ley y las disposiciones normativas y gubernamentales relacionadas, deberán tener en cuenta la tipificación de usuarios y consumidores de sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas que está dispuesta en esta ley y que la literatura académica ofrece con el fin de que se tenga un tratamiento diferenciado en la aplicación de políticas públicas y programas.

**ARTÍCULO 13. Dosis para uso personal.** El usuario y/o consumidor de sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas podrá portar o conservar una dosis de consumo personal de sustancias psicoactivas conforme a lo establecido con el artículo 02 del Estatuto Nacional de Estupefacientes, Ley 30 de 1986 y la garantía de su derecho constitucional al Libre desarrollo de su personalidad.

Las cantidades definidas como dosis mínima para las sustancias psicoactivas no contempladas en la Ley 30 de 1986, deberán ser establecidas en la reglamentación de la presente ley, previa sustentación basada los incisos 8 y 10 del artículo 02 de esta ley.

**ARTÍCULO 14. Autocultivo para uso personal de la planta de cannabis.** Se autorizará, sin licenciamiento previo, el autocultivo en propiedad privada de no más de (20) plantas de variedad cannábica para uso personal siempre y cuando no tenga fines de comercialización o lucro que no se encuentre regulado.

El cultivo que exceda esta cantidad deberá solicitar licenciamiento previo en concordancia con la presente ley y las disposiciones y prohibiciones normativas previstas para cada fin o uso.

# CAPÍTULO IV: DISMINUCIÓN DEL RIESGO, MITIGACIÓN DEL DAÑO Y BUENAS PRÁCTICAS DE CUIDADO

**ARTÍCULO 15. Disminución del riesgo y mitigación del daño.** La disminución del riesgo y la mitigación del daño en el uso y consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas se reconocerá como un enfoque de salud pública válido y necesario para preservar la salud de los habitantes de la nación. Este enfoque complementará y no reemplazará los esfuerzos estatales respecto a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

La disminución del riesgo y la mitigación del daño deberá centrarse en el cuidado y la protección de la integridad física y mental del individuo de la siguiente manera:

1. Propendiendo por el acceso a la información adecuada y oportuna sobre buenas prácticas de cuidado y prácticas, herramientas e información para la disminución del riesgo y mitigación del daño.
2. Garantizando que los espacios de habitual consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas tengan óptimas condiciones para consumos responsables.
3. Monitoreando y alertando eventuales riesgos químicos por sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas que estén en circulación en territorios específicos.
4. Garantizando el adecuado acceso a los servicios de salud en caso de ser requeridos.

**ARTÍCULO 16. Responsabilidad del estado.** El Estado encaminará acciones para la disminución del riesgo y la mitigación del daño del uso y consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas por parte de los habitantes, residentes o visitantes del territorio nacional. Estas acciones deberán estar enmarcadas en un enfoque de salud pública, así como garantizar el acceso a los servicios de salud a quien lo requiera conforme a la Ley 1566 de 2012 y los derechos otorgados en la Constitución.

**ARTÍCULO 17. Responsabilidades de las entidades territoriales.** Las entidades territoriales como gobernaciones y alcaldías deberán establecer protocolos para la disminución del riesgo, mitigación del daño y prácticas de cuidado en los territorios de su jurisdicción, así como la creación de rutas de atención y alertas tempranas de riesgos químicos.

Las secretarías de salud y las secretarías de gobierno de las entidades territoriales velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por esta ley.

**ARTÍCULO 18. Obligaciones de los lugares de habitual consumo.** Los lugares de habitual consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas como los establecimientos públicos nocturnos, bares, discotecas, casinos, hoteles, zonas de camping, así como los organizadores de eventos masivos como conciertos, ferias, festivales, fiestas populares, patronales y tradicionales entre otros deberán establecer protocolos para la disminución del riesgo y la mitigación del daño. Dentro de estos protocolos deberán contemplar los siguientes ítems:

1. Tener visible y en óptimas condiciones la infografía con la información básica de cuidado, disminución del riesgo y mitigación del daño contemplada en el artículo 8 de la presente ley. Además, cualquier material pedagógico e informativo sobre el consumo responsable, prácticas de cuidado y rutas de atención.
2. Disponer de un espacio de descanso en sus establecimientos o en la zona destinada para la realización de los eventos masivos.
3. Establecer una ruta de atención clara para casos de uso problemático de sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas o quien requiera o necesite ayuda.
4. Disponer de equipos de primeros auxilios y personal formado en atención temprana a casos que lo requieran.
5. Suministrar agua potable óptima para el consumo humano a quien lo solicite y las veces que lo solicite dentro de sus instalaciones.

**ARTÍCULO 19. Zonas de descanso en los lugares de habitual consumo.** Los lugares de habitual consumo deberán disponer en sus establecimientos, por lo menos, una zona de descanso para sus usuarios. Estas zonas de descanso deberán contener estas características mínimas:

1. Ser zonas altamente ventiladas y/o de circulación de aire fresco
2. Tener suficiente iluminación
3. Acceso a dispensadores de agua potable apta para el consumo
4. Tener información visible sobre buenas prácticas de cuidado y protocolos para la disminución del riesgo y mitigación del daño.

**Parágrafo**: El incumplimiento por parte de los establecimientos de habitual consumo y/o los organizadores de eventos masivos de lo dispuesto en la presente ley, será objeto a las sanciones por parte de las entidades de vigilancia y regulación.

## ARTÍCULO 20. Puestos de análisis de sustancias psicoactivas. El Gobierno Nacional, las Secretarías de Gobierno y las Secretarías de Salud de los Departamentos y los Municipios deberán instalar Puestos de Análisis de Sustancias Psicoactivas de manera fija o itinerante en las zonas de alto flujo turístico, zonas de habitual consumo, zonas de comercio nocturno, eventos masivos como: festivales, conciertos fiestas tradicionales y en general, lugares de alta demanda en la venta, uso y consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, con el objeto de realizar análisis rápidos y en tiempo real sobre la calidad y composición de estas sustancias, brindar información al consumidor sobre la calidad de las mismas y disminuir los posibles riesgos químicos por adulterantes y/o suplantadores.

La implementación de esta estrategia deberá estar acompañada de material informativo y pedagógico sobre buenas prácticas de cuidado, disminución del riesgo y mitigación del daño. Así como orientar a los consumidores a los protocolos de atención establecidos en cada municipio y/o departamento de ser requerido.

**Parágrafo 1:** la implementación de esta estrategia deberá contar con un enfoque de salud pública y estar enmarcada en los principios de la presente ley, respetando el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a tomar decisiones informados, a la no discriminación, al respeto por la dignidad humana, el derecho a la confidencialidad y la protección del derecho a la salud.

**Parágrafo 2**: La información recabada por esta estrategia deberá ser documentada y trasladada al Sistema de Alertas Tempranas del Observatorio de Drogas de Colombia y los sistemas de alertas tempranas de los municipios y gobernaciones, con el fin realizar monitoreos e implementar estrategias específicas.

**Parágrafo 3**: Las secretarías de Gobierno y/o las Secretarías de Salud de los municipios y departamentos podrán exigir a los organizadores, dentro de los requisitos que se solicitan para la realización de eventos masivos de mediano y gran formato, la contratación de servicios de análisis de sustancias psicoactivas dentro de su operación logística. Estos servicios podrán contratarse a organizaciones de sociedad civil legalmente constituidas, laboratorios y/o universidades que estén debidamente acreditadas por el Fondo Nacional de Estupefacientes para realizar esta labor.

# CAPÍTULO V: OTRAS DISPOSICIONES

## ARTÍCULO 21. Participación de la sociedad civil. El Gobierno Nacional establecerá un Consejo Asesor de la Sociedad Civil convocado por el Ministerio del Interior y la participación del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación y La Policía Nacional. El Gobierno Nacional podrá invitar a integrantes del Congreso de la República que hayan propuesto o tengan en curso, proyectos de ley relacionados con la materia.

Este consejo asesor estará compuesto por miembros expertos e idóneos de la sociedad civil. Contará con la participación de organizaciones de la sociedad civil cuyo objetivo sea el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas, la reducción de riesgos, mitigación de daños y promoción de buenas prácticas de cuidado, así como organizaciones que representen a las personas usuarias de sustancias psicoactivas, centros de estudio, universidades y miembros de la comunidad académica dedicados a la investigación, análisis y evaluación de la problemática de drogas desde la perspectiva de salud pública, garantía de los derechos y evaluación y el análisis de políticas públicas.

El objetivo de este consejo será asesorar al Gobierno Nacional sobre la implementación y desarrollo de las políticas aplicadas en materia de sustancias psicoactivas y hacer una revisión constante de las leyes aprobadas por el Congreso de Colombia, los proyectos de ley, actos legislativos y demás normativa que se encuentre en curso relacionadas con esta materia.

**ARTÍCULO 22. Mesa Nacional de Consumo Responsable de Sustancias Reguladas**. El Ministerio de Salud y Protección Social conformará la mesa Nacional de Consumo Responsable de Sustancias Reguladas con el objetivo de establecer un plan de consumo responsable para las sustancias que tienen un mercado regulado como el alcohol y el tabaco, pero que su consumo tiene altas afectaciones a la salud de la persona usuaria y del entorno social que lo rodea.

El plan establecido por esta mesa deberá estar enmarcado en los principios de esta ley y deberá ser concertado con la industria licorera del país, la academia y la sociedad civil.

**ARTÍCULO 23. Reglamentación.** El gobierno nacional deberá expedir la reglamentación necesaria para la correcta implementación de lo contenido en la presente ley en un término no mayor a un año contado a partir de su promulgación.

**ARTÍCULO 24. Vigencia.** La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

|  |  |
| --- | --- |
| **DANIEL CARVALHO MEJÍA**  Representante a la Cámara por Antioquia | **HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA**  Senador de la República  Coalición Alianza Verde Centro Esperanza |
| **JUAN CARLOS LOZADA VARGAS**  Representante a la Cámara por Bogotá  Partido Liberal Colombiano | **JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ GONZÁLEZ**  Representante a la Cámara por Caldas  Nuevo Liberalismo |
| **JENNIFER PEDRAZA SANDOVAL**  Representante a la Cámara por Bogotá  Partido Dignidad | **JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES**  Representante a la Cámara por Boyacá  Partido Alianza Verde |
| **KATHERINE MIRANDA**  Representante a la Cámara  Partido Alianza Verde | **ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  Representante a la Cámara por Risaralda  Partido Alianza Verde |
| **DUVALIER SÁNCHEZ ARANGO**  Representante a la Cámara por el Valle del Cauca  Partido Alianza Verde | **OLGA LUCÍA VELÁSQUEZ**  Representante a la Cámara Bogotá  Partido Alianza Verde |
| **CRISTIAN DANILO AVENDAÑO FINO**  Representante a la Cámara Santander  Partido Alianza Verde | **ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA**  Representante a la Cámara  Partido Alianza Verde |
| **JULIA MIRANDA LONDOÑO**  Representante a la Cámara por Bogotá  Partido Nuevo Liberalismo |  |

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

1. **INTRODUCCIÓN**

En el asunto de las drogas, el enfoque punitivo, prohibitivo y de prevención del consumo han dominado el escenario de actuación institucional del país a pesar de los precarios resultados frente a la circulación, la disponibilidad y el consumo de drogas ilícitas en el territorio nacional. Contrario a lo que se espera, estos enfoques han generado un ambiente de estigmatización hacia las personas y culturas consumidoras de sustancias psicoactivas, el irrespeto por sus derechos fundamentales y la exclusión de una conversación que esté basada en la evidencia con fundamento científico y no en los prejuicios instalados desde el inicio de la hoy fallida guerra contra las drogas que inició en la década de los años 70s.

A pesar de esto, las altas cortes del país han liderado una postura más cercana a la protección de derechos fundamentales de los consumidores de sustancias psicoactivas, enalteciendo el espíritu liberal de la Constitución Política de 1991. Además, el Gobierno Nacional, desde un poco más de la última década, ha transformado sus posturas prohibicionistas y abstencionistas frente al consumo y ha adoptado un enfoque de salud pública que ha permitido avances normativos y enfocar esfuerzos tendientes a la protección de la salud de los individuos. Estos avances han permitido, entre otras cosas, abrir la discusión sobre la necesidad de la regulación de las sustancias psicoactivas ilícitas en el país acorde a la tendencia mundial de ver en la regulación una oportunidad, no sólo para reevaluar la fallida guerra contra las drogas, sino también para consolidar una cultura de consumos más responsables y contemplar acciones para la disminución de riesgos, mitigación de los daños y promover prácticas de cuidado para los individuos consumidores y la sociedad que lo rodea sin perjuicio a los esfuerzos institucionales para disminuir el consumo de drogas y tratar aquellos consumos considerados como problemáticos.

Sin embargo, la regulación de los mercados de algunos estupefacientes en Colombia aún le queda un largo camino y esta salida no garantizará, por sí sola, la implementación de un enfoque que busque proteger la salud de las personas usuarias y consumidoras. El caso del alcohol, sustancia psicoactiva más consumida por los Colombianos y que tiene una regulación en su mercado, es paradigmático en cuanto a los retos de salud pública y cultura del cuidado, disminución de riesgos y mitigación de daños se refiere.

Es necesario entonces, contemplar una directriz para disminución de los riesgos, mitigación de los daños y promoción de una cultura de cuidado en el uso y consumo de sustancias psicoactivas sin importar su estatus legal o estado de regulación para proteger la salud de los colombianos y garantizar sus derechos al libre desarrollo de su personalidad, su autodeterminación individual y su dignidad humana.

Este Proyecto de Ley, a través de sus (V) Capítulos y sus (27) Artículos, los siguientes objetivos: (I) proteger los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a la salud. (II) Promover una cultura del cuidado en el uso y consumo de sustancias psicoactivas entre las personas usuarias y consumidores, el Estado y la sociedad. (III) establecer medidas para la disminución del riesgo y mitigación del daño en el uso y consumo de sustancias psicoactivas.

1. **JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

La sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz despenalizó el porte y consumo de la dosis personal de estupefacientes prevista en los artículos 51 y 81 de la Ley 30 de 1986, *Estatuto Nacional de Estupefacientes*. La ponencia argumentó que esta disposición legislativa atenta con la autonomía y el derecho al libre desarrollo de la personalidad protegidos por el espíritu y la filosofía libertaria, democrática y no autoritaria de la Constitución Política de 1991. La sentencia resolvió reconocer la autonomía de las personas y que estas decidan sobre su sentido de existencia mientras no interfiera con la autonomía de otras y el interés común de una sociedad. Lo que contraríe esto, sería a todas luces, inconstitucional.

El derecho fundamental protegido incitaba al Estado a que, si encontrase indeseable el consumo de narcóticos y estupefacientes sin que esto signifique vulnerar la libertad de las personas, la vía que debería de tomar el Estado es de la educación.

“*Se trata de que cada persona elija su forma de vida responsablemente y para lograr ese objetivo es preciso remover el obstáculo mayor y definitivo: la ignorancia. No puede pues, un Estado respetuoso de la dignidad humana, de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, escamotear su obligación irrenunciable de educar y sustituir a ella la represión como forma de controlar el consumo de sustancias que se juzgan nocivas para la persona individualmente considerada y, eventualmente, para la comunidad a al que necesariamente se halla integrada*”

Desde entonces, la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad en lo que respecta al consumo de estupefacientes se ha refrendado constantemente en las sentencias subsiguientes de las altas cortes. En estos desarrollos, la Corte Constitucional ha tutelado el respeto de la dignidad humana como un principio axial del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal[[1]](#footnote-1). En este sentido, menciona las tres dimensiones de la dignidad humana que deben ser respetadas como principio: “(i) la dignidad humana como autonomía individual, (ii) la dignidad humana como condiciones de existencia y (iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, la integridad física y la integridad moral”[[2]](#footnote-2). Esto para proteger, desde la perspectiva del principio de dignidad humana, los derechos de la persona usuaria de sustancias psicoactivas sin importar su condición de consumo.

En el 2009, el Congreso modificó el artículo 49 de la Constitución a través de la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2009, añadiendo un párrafo que prohíbe expresamente el porte y consumo de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica salvo prescripción médica. A pesar de que la interpretación inicial a las pretensiones de este acto legislativo era el de concebir el porte y consumo de estupefacientes como un acto punible por parte del Estado, la Corte Suprema de Justicia reiteró la tesis que “*al consumidor, como sujeto de protección constitucional reforzada, merecedor por tanto de una discrminiación positiva, riñe con el contenido injusto de una conducta punible”[[3]](#footnote-3)*. Así mismo, las sentencias C-574 y C-882 de 2011 de la Corte Constitucional precisaron, por vía interpretación, que el alcance de esta reforma constitucional en el sentido que la prohibición del porte y consumo de estupefacientes establecida no conllevaría algún tipo de actividad punible.

“*En modo alguno conlleva a su penalización, destinado para ello, como consecuencia jurídica, la imposición de medidas administrativas de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico, siempre bajo el consentimiento informado del adicto*”

La Corte fue enfática en que este apartado del artículo 49 de la constitución respecto la prohibición del porte y consumo de estupefacientes no puede entenderse de manera punitiva o sancionatoria sino como una medida para proteger la salud de los ciudadanos.

“*Hay lugar a inferir que la prohibición del porte y consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, salvo prescripción médica, que en un principio parece como absoluto, podría estar limitado ya que se establece que éstas medidas de índole administrativo se establecerán solamente con fines preventivos y rehabilitadores de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias y que el sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto, circunstancia que atenuaría la prohibición sin limitaciones del porte y consumo de estas sustancias*” Sentencia C-574-2011.

Así mismo, enfatizó que esta interpretación no va en contravía del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía individual y la dignidad humana. Tampoco riñe con lo establecido en la sentencia C-221 de 1994 en cuanto a la protección de estos derechos. Además, aclara que es potestad del legislativo establecer medidas administrativas de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consumas estas sustancias.

“*La segunda oración del inciso sexto que señala que* “*Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias*”, *da lugar a varias interpretaciones. En primer término, que se trata de una norma remisoria, ya que se establece que será el legislador el que establezca las medidas administrativas de carácter preventivo y rehabilitador. En segundo lugar, que dichas medidas solo podrían tener un carácter “preventivo” y “rehabilitador”. Sentencia* C-574 de 2011.

Como se ha expuesto, la Corte Constitucional ha reiterado el mandato de protección de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, el respeto por la autonomía personal, a la dignidad humana y a la protección de la salud de las personas usuarias y consumidoras de sustancias psicoactivas. Bajo este mandato se ha interpretado el párrafo introducido al artículo 49 de la Constitución Política a través del Acto Legislativo 002 del 2009, dándole una responsabilidad al legislador de establecer medidas administrativas de orden pedagógico, profiláctico y terapéutico en concordancia con los derechos aquí expuestos.

Es por lo anterior que, el Proyecto de Ley: “Por medio del cual se protegen los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a salud de los individuos promoviendo buenas prácticas de cuidado, reducción de riesgos y mitigación de daños en los usos y consumos de sustancias psicoactivas en el territorio nacional” es necesario, pertinente y concordante con los mandatos que la Corte Constitucional y la Constitución Política de Colombia han proferido en materia de usos y consumos de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, pues establece medidas administrativas con fines pedagógicos, informativos y profilácticos con el objetivo de proteger la salud de los consumidores con un enfoque de disminución de riesgos, mitigación de daños y la promoción de buenas prácticas de cuidado en caso tal que el individuo, ejerciendo su autonomía personal y derecho al libre desarrollo de la personalidad, decidiese consumir sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas.

Así mismo, esta ley establece responsabilidades al estado y a la sociedad en cuanto a la garantía de estos derechos y la protección de la salud de los ciudadanos que decidan consumir sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas.

Este proyecto de ley entiende que la garantía de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal, el respeto por la dignidad humana y el cuidado y protección de la salud y la integridad física no deben ser excluyentes y, por tanto, las acciones estatales deberán ser concordantes para que estos sean garantizados sin condicionamiento alguno.

De conformidad con lo anterior, esta Ley está compuesta por cinco capítulos y 27 artículos que serán desarrollados y explicados a continuación.

1. **EXPLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ARTICULADO**
   1. **Capítulo 1. Disposiciones generales.**

Este capítulo contiene las disposiciones generales de la presente ley: el objeto, los principios en los que se ampara y las definiciones básicas con las que se entiende el desarrollo de su articulado y disposiciones.

Esta ley tiene como objeto la protección de los derechos al Libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a la salud de los colombianos conforme a la Constitución Política de Colombia a través de disposiciones y acciones que le permitan al Estado, a los individuos y a la sociedad promover buenas prácticas de cuidado, reducir riesgos y mitigar daños en los usos y consumos de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en el territorio nacional. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en lo que respecta al consumo de sustancias consideradas estupefacientes.

* + 1. **Principios.**

Además de la protección y garantía de los derechos fundamentales al Libre Desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a la salud que dan propósito a este proyecto de ley, existen otros principios que complementan una visión frente al consumo de sustancias psicoactivas.

Principios como el derecho a la no discriminación y el principio de confidencialidad y anonimato, ambos principios conexos al Derecho a la dignidad humana son fundamentales para una transformación del enfoque peligrosista y estigmatizatorio con el que se ha abordado históricamente el consumo de sustancias psicoactivas por parte del Estado y del conjunto de la sociedad.

Los principios que contemplan el acceso a la información y la educación, así como el principio que exige acciones basadas en la evidencia, entienden que, el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas debe estar desprovisto de prejuicios fundamentados en creencias y concepciones morales sobre lo que debería de hacer o no los individuos de una sociedad. Estos principios conciben al individuo como sujetos con capacidad de discernimiento, que merece acceso a información verás, actualizada y basada en la evidencia con fundamento científico sobre la composición las sustancias psicoactivas que pretende o no consumir, los riesgos que conllevan su eventual consumo y las formas, prácticas y protocolos para cuidar su integridad física y mental. Estos principios buscan formar ciudadanos responsables y conscientes sobre lo que consumen y las mejores formas de consumir para preservar su calidad de vida y la de los demás.

Otros de los principios contemplados representan poblaciones y comunidades que merecen un tratamiento especial en la aplicación de esta Ley. Entre esos está los niños, niñas y adolescentes que deberán ser sujetos de especial protección en cuanto a esta materia como lo exige la Constitución Política y las leyes, así como el respeto por las prácticas culturales y la diversidad cultural del país, en las que el uso de sustancias psicoactivas tienen una connotación cosmogónica particular y que las disposiciones o restricciones de una ley o marco normativo no deberán ser implementadas sin considerar sus condiciones especiales y protegidas por el espíritu pluricultural de la Constitución Política de 1991. Por último, la aplicación de esta ley y sus disposiciones derivadas, deberán reconocer la experticia, conocimiento y legitimidad de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que han sido pioneros en liderar la discusión sobre la necesidad de cambiar el enfoque prohibicionista, peligrosista y estigmatizatorio como se ha abordado el asunto de las drogas en el país, además de su aporte en la promoción de buenas prácticas de cuidado, disminución de riesgos y mitigación de daños con iniciativas exitosas en el país.

**3.1.2 Sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas.**

Según el Ministerio de Salud de Colombia[[4]](#footnote-4), en armonía con la Organización Panamericana de Salud, las sustancias psicoactivas - SPA o psicotrópicas es definida como:

“*Toda sustancia introducida en el organismo por cualquier vía de administración (ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras) produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, la cual modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento. Su consumo puede crear consumo problemático o dependencia.”*

Esta definición, ampliamente aceptada en la literatura, abarca sustancias lícitas con una historia de regulación estatal como el alcohol o el tabaco, así como sustancias ilícitas, también consideradas como estupefacientes por los tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas[[5]](#footnote-5) y que, por ser consideradas ilícitas, no cuentan con un marco regulatorio de sus mercados en Colombia.

Aunque es clara la diferencia entre el tratamiento en la categorización de licitud e ilicitud de estas sustancias, el enfoque de protección de derechos, la promoción de buenas prácticas de cuidado, la reducción de riesgos y mitigación de daños que este proyecto de ley contempla, es pertinente para la condición de riesgo y vulnerabilidad en la integralidad de quien decide consumirlas independientemente de su estatus legal o normativo. Por esto, este proyecto de ley no limita o diferencia su aplicación dependiendo del estatus legal que tenga un grupo de sustancia particular, entre otras razones, porque dicho estatus puede cambiar de acuerdo con la tendencia regulatoria en la que está entrando el contexto nacional e internacional.

* 1. **Capítulo II: Respecto al derecho a tomar decisiones informado.**

Reconocer al individuo como un sujeto con capacidad de discernimiento y agencia sobre sí mismo y sus decisiones es un paso fundamental para el reconocer su dignidad y el respeto a su libre desarrollo de la personalidad. Resulta necesario entonces, brindarle información adecuada para que sus decisiones tengan una conciencia de responsabilidad y cuidado de sí mismo y su entorno. No es en vano que, la Corte Constitucional en la sentencia C-221 de 1994 halla como como objetivos precisos del Estado, *si este encuentra indeseable el consumo de estupefaciente* *sin vulnerar la libertad de las personas*, combatir la ignorancia y generar las condiciones adecuadas para que cada persona elija su forma de vida responsable.

Desde un enfoque de derechos, la implementación de políticas y acciones estatales que buscan la disminución de los riesgos y mitigación de los daños en los usos y consumos de drogas, es fundamental contemplar medidas que permitan el acceso oportuno a información veraz, confiable, actualizada y basada en la evidencia con fundamento científico sobre todo lo relacionado al consumo de sustancias psicoactivas, desde información detallada sobre las sustancias disponibles y en circulación nacional, sus efectos en el cuerpo, en la mente y en el comportamiento, así como buenas prácticas de cuidado e información pertinente en la gestión de los riegos y los daños que implican su consumo.

La información es fundamental, no sólo para que las personas consumidoras tomen decisiones más conscientes y de manera responsable, sino también para el monitoreo y coordinación de acciones por parte del estado y de sus instituciones, sobre las prácticas de consumo, las sustancias en circulación y los posibles riesgos químicos para los consumidores.

* 1. **Capítulo III: Respecto a los usuarios y consumidores**

Las disposiciones contempladas en este capítulo buscan que el tratamiento a usuarios y consumidores de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas estén en el marco del respeto a sus derechos protegidos por la Corte Constitucional y el marco normativo de Colombia.

La dosis de uso personal ha tenido un extenso debate jurídico y político en el país. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, se ha establecido que este es un derecho que los consumidores de sustancias psicoactivas en el marco de su autonomía personal protegida por la constitución política de 1991. El artículo 02 del Estatuto Nacional de Estupefacientes, Ley 30 de 1986 establece que:

“*Es la cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo. Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o de cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos. No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad*.”

Artículo declarado EXCEQUIBLE por la Corte Constitucional que despenalizó el uso, consumo y porte de sustancias psicoactivas.

El autocultivo de plantas de cannabis es una medida adoptada por el decreto 613 de 2017 y el 811 de 2021[[6]](#footnote-6). Esta medida busca proteger al consumidor adulto de cannabis para que autocultive su dosis personal de cannabis sin que tenga que acudir al mercado ilegal monopolizado por grupos al margen de la ley y los cuales no se garantiza la calidad de su producto ni la trazabilidad de su origen.

* 1. **Capítulo IV. Disminución del riesgo, mitigación del daño y buenas prácticas del cuidado.**

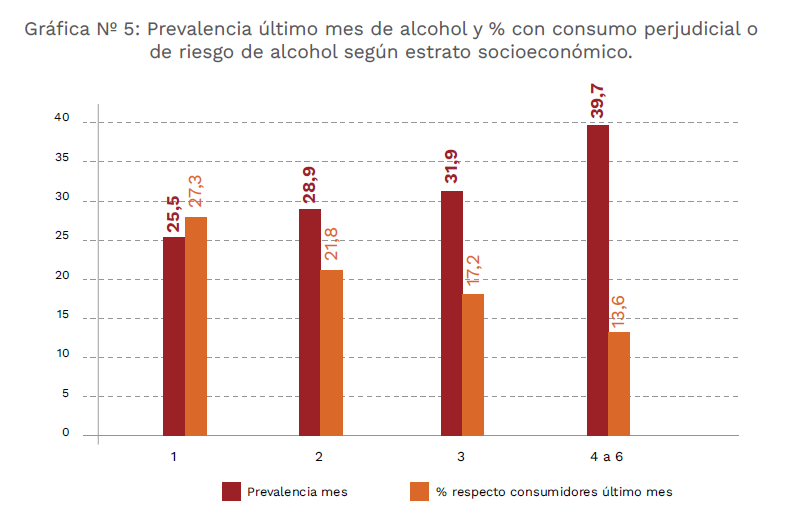
El consumo de sustancias psicoactivas es una realidad en el mundo. El objetivo de “un mundo libre de drogas” ha sido, a todas luces, un objetivo fallido. Los resultados que ha tenido la lucha contra las drogas han sido marginales a los índices de consumo y comercialización.[[7]](#footnote-7) La guerra contra las drogas, además de ser poco eficaz, tiende a ser poco eficiente. Los Estados gastan millones de dólares en la fiscalización de los mercados ilegales de drogas y éstos mutan a mecanismos más avanzados para ser efectivos en sus objetivos de distribuir y comercializar las sustancias. El informe Mundial sobre las Drogas de 2021 de la UNODC[[8]](#footnote-8) alerta sobre el creciente mercado ilegal de drogas a través de sofisticados mecanismos de innovación tecnológica y su capacidad de adaptabilidad, ha hecho que sus ventas sigan en aumento a pesar de la inversión para intentar acabarlas. Esto, a costa de criminalizar al consumidor.

“*La tendencia de una política pública basada principalmente en el control de la oferta de drogas ha fortalecido el enfoque tradicional de criminalizar a la persona que consume, lo cual ha logrado limitadas respuestas y efectos en la mitigación de los daños asociados a este fenómeno*” Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia[[9]](#footnote-9)

Una respuesta cada vez más común por parte de los Estados del mundo es la de regularizar ciertos mercados de estupefacientes y entender el consumo como un asunto de salud pública que requiere de medidas para disminuir los riesgos y mitigar los daños en los consumos problemáticos. Colombia no ha sido la excepción y, a pesar de que aún predomina el enfoque prohibicionista y la posibilidad de regulación de estos mercados tienen grandes desafíos en el debate público, el Estado ha aceptado el consumo de sustancias psicoactivas como una realidad inexorable.

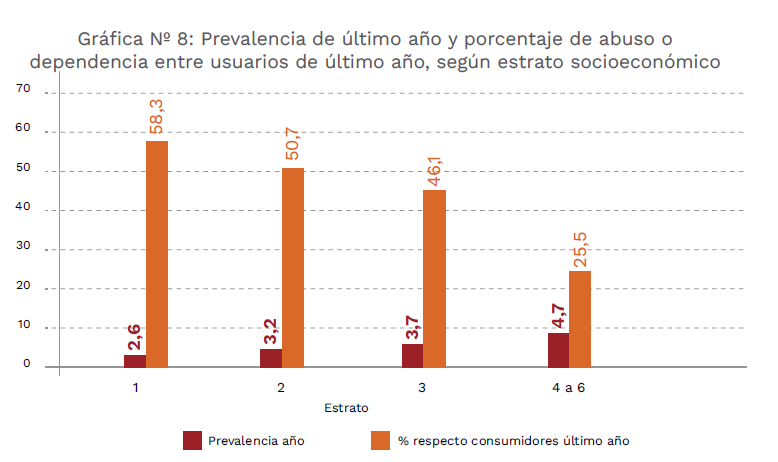
Es por esto por lo que, desde el 2008 el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del Observatorio de Drogas de Colombia, realiza un Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, en el cual se realiza una encuesta a consumidores de todo tipo de sustancia psicoactiva regulada y no regulada para conocer su comportamiento. Además, en el 2012 se aprobó la Ley 1566 la cual declara el consumo de sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública, propiciando un marco normativo para que las personas cuyos consumos sean problemáticos puedan acceder a servicios de salud especializados y se les garantice sus derechos.

Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para disminuir los riesgos y fomentar una cultura del cuidado y del consumo adecuado de las sustancias psicoactivas. El mejor ejemplo de esto es el alcohol qué, a pesar de tener una regulación de vieja data en el país, su consumo problemático tiene aún altos índices de consumo perjudicial o de abuso. Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2019, cerca de un millón quinientas mil personas pueden considerarse como consumidoras perjudiciales o de riesgo de alcohol. Esto es, el 6,1% de la población total de Colombia y el 20,4% de la población consumidora de esta sustancia, siendo los estratos 1, 2 y 3, el segmento poblacional con mayores porcentajes de consumo perjudicial del alcohol.



Tomado de Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, 2019

Sin embargo, hay una clara diferencia entre el consumo de sustancias psicoactivas y el consumo perjudicial, problemático o de riesgo de sustancias psicoactivas. Para continuar con el ejemplo del alcohol, en la gráfica anterior puede verse que, aunque los estratos 4 al 6 tienen mayor prevalencia en el consumo de alcohol, su porcentaje de consumo perjudicial o de riesgo es muy inferior a los estratos 1, 2 y 3 que tienen a su vez, menor prevalencia en el consumo. Este comportamiento también es similar en el consumo de sustancias ilícitas, como lo ilustra la siguiente gráfica del mismo estudio.



Tomado de Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, 2019

Esto puede llevar a pensar que es posible propender por un consumo responsable sin que esto conlleve a un consumo problemático, perjudicial o que genere abuso o dependencia. Ese es un reto que las políticas públicas y los programas gubernamentales tienen, fundamentalmente, en los estratos 1, 2 y 3. La información sobre los efectos en el cuerpo, el comportamiento y la actividad cognitiva es un paso importante para concientizar a las personas consumidoras y aumentar la percepción del riesgo al momento de consumir sustancias psicoactivas independientemente de su estatus legal. Aumentar la percepción del riesgo permitirá que las personas consumidoras contemplen prácticas de cuidado, prácticas para disminuir esos riesgos y protocolos o acciones encaminadas a mitigar el daño si lo hubiere.

La disminución del riesgo y la mitigación de daños son enfoques de vanguardia al momento de abordar el consumo de sustancias psicoactivas desde el paradigma de la salud pública. Estos enfoques buscan preservar la integridad física, cognitiva y social de la persona consumidora sin que haya lugar a la criminalización del consumo o la propensión -muchas veces ineficaz- a la abstinencia. Una descripción precisa de los objetivos de estos enfoques es la contenida en la Exposición de Motivos del PL 223-2021C del HR Jorge Enrique Benedetti Martelo

“*Estas políticas no usan el cese de todo uso de drogas como su criterio para intervenciones y políticas exitosas. El objetivo es lograr avances positivos en la calidad de vida, así como en el bienestar individual y comunitario. Si el paciente decide que quiere trabajar hacia la abstinencia esto es aún mejor, pero dicha expectativa nunca se coloca en el paciente. El profesional de reducción de riesgos y daños busca reunirse con el paciente en donde este se encuentra en términos de su motivación y capacidad para efectuar cambios*”[[10]](#footnote-10)

Estos enfoques, que se han implementado con éxito para evitar la propagación de infecciones de Hepatitis C, VIH y tuberculosis por el uso y consumo de sustancias psicoactivas inyectables, así como la implementación de estrategias de consumo regulado para personas con problemas de farmacodependencia, pueden ser implementados para cualquier tipo de consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales con estrategias diferenciadas para cada tipología de consumo. Algunas de estas son: disponibilidad de información sobre la sustancia a consumir, sus compuestos y los efectos que genera en el cuerpo, la mente y el comportamiento de quien consume; procedimientos para analizar sustancias y advertir cualquier tipo de adulterantes; abundante consumo de agua potable antes, durante y después del consumo; disponer de zonas de descanso en zonas de habitual consumo; acceder a protocolos de mitigación de daño y si lo amerita, atención médica de manera oportuna.

Así mismo, este Proyecto de Ley contempla un especial énfasis en la promoción de una cultura del cuidado a través de buenas prácticas en el uso y consumo de sustancias psicoactivas. Las buenas prácticas del cuidado son aquellas que propenden por el cuidado integral de la persona en una situación de vulnerabilidad como lo es el consumo de cualquier sustancia psicoactiva. Estas prácticas van más allá de las acciones reactivas o preventivas de los enfoques de disminución del riesgo y mitigación del daño, pues consideran el entorno, la seguridad de la persona usuaria, la consciencia sobre lo que consume y en las condiciones que consume, entre otros aspectos encaminados a consumos más responsables y conscientes para el cuidado de sí mismo. Esta es una perspectiva que requiere de tiempo, esfuerzo y constancia para establecer en la sociedad, un marco de comportamiento y unos valores que conduzcan a la construcción de una ética del consumo consciente y responsable, que reivindique la libertad del individuo sin que esta libertad sacrifique su bienestar y el bienestar de su entorno.

La sociedad civil organizada en Colombia ha sido pionera en la implementación de enfoques de disminución de riesgos y mitigación de daños, así como la promoción de buenas prácticas de cuidado y consumo responsable. Algunas de estas organizaciones, como la Acción Técnica Social entre otras, han implementado estrategias de vanguardia para que las personas usuarias de sustancias psicoactivas se informen de las sustancias que consumen y gestionen sus riesgos y placeres, entre esas estrategias están el análisis de sustancias psicoactivas en lugares de habitual consumo para el testeo de sus componentes y alertar los posibles adulterantes y/o suplantadores que contengan las sustancias analizadas. Esto acompañado de un seguimiento y divulgación, en tiempo real, de alertas por posibles riesgos químicos, prácticas peligrosas de consumo o nuevas sustancias psicoactivas en circulación. La experiencia y el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil, universidades y demás instituciones serán de gran importancia en la implementación y evaluación de la políticas y acciones derivadas de este proyecto de ley después de su aprobación.

1. **ANTECEDENTES LEGISLATIVOS**

A pesar del enfoque prohibicionista que ha imperado en Colombia respecto al asunto de las drogas o de las sustancias psicoactivas ilícitas, el país ha tenido avances significativos para proteger los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía del individuo y el derecho a la salud. La mayoría de estos están protegidos por las disposiciones de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, existen antecedentes jurídicos vigentes que protegen estos derechos.

En definitiva, el más paradójico fue la expedición de la Ley 30 de 1986 “*por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones*”, el cual penalizó el porte y consumo de sustancias psicoactivas[[11]](#footnote-11), pero que, al tiempo, permitió la dosis de uso personal en su artículo 02:

“*ARTÍCULO 2do. (Definiciones). Para efectos de la presente ley se adoptarán las siguientes definiciones:*

*(…)*

*j) Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo. Es dosis para uso persona la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la marihuana hachís que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o de cualquier otra sustancia a base de cocaína que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de (2) gramos.*

*No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad*”

En esta misma ley, se contempló la penalización de la plantación superior a veinte (20) plantas de marihuana o de cualquier otra droga que produzca dependencia, abriendo la posibilidad de permitir cultivos inferiores a (20) plantas sin ningún tipo de penalización siempre y cuando sea de uso personal.

Durante la primera década del nuevo siglo, hubo varios intentos por parte del Gobierno Nacional para prohibir y penalizar el porte y consumo de estupefacientes desde la Constitución Política. A pesar de los intentos fallidos, el Congreso de la República aprobó del Acto Legislativo 02 del 2009 por el cual modificada el artículo 49 de la Constitución y elevaba, a rango constitucional, la prohibición del porte y consumo de estupefacientes.

Aunque este acto legislativo se demandó ante la Corte Constitucional, ésta se declaró inhibida para pronunciarse de fondo en la sentencia C-574 de 2011. Sin embargo, dejó claro que este acto legislativo no puede entenderse como una medida que conlleve a una conducta punible por parte del Estado, sino como una disposición constitucional para proteger la salud de las y los colombianos. Discusión desarrollada en el apartado de *justificación* en la Exposición de Motivos del presente Proyecto de Ley.

En el 2012 se promulgó la ley 1566 “*Por medio de la cual, se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional Entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas*”. Esta ley le dio un vuelco al enfoque punitivo de las drogas para darle el tratamiento de salud pública que estaba imperando en el mundo. Este paso fue importante para reconocer y proteger, vía legislativa, el derecho a la salud de los consumidores, especialmente aquellos que necesitan atención especializada para consumos problemáticos.

Posteriormente, se promulgó la ley 1787 de 2016 “*Por medio del cual se reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009*” la cual tenía como objeto “*regular el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados*”. Esto generó un desarrollo de la disposición constitucional enfocada a la promoción y protección de la salud a partir de una sustancia no regulada como el cannabis.

En el 2021, el Honorable Representante Jorge Enrique Benedetti Martelo, presentó el Proyecto de Ley 223/2021C “*Por medio del cual se crea un marco legal para el desarrollo de las políticas de reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones*”. Este contemplaba acciones encaminadas a la mitigación de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas enfocadas, principalmente, en la edificación de una institucionalidad sólida que se encargará de esto. El Proyecto de Ley, a pesar de ser aprobado en primer debate, no surtió trámite y fue posteriormente archivado.

**5. CONFLICTO DE INTERESES**

El artículo 291 de la ley 5 de 1992, modificada por la ley 2003 de 2019, establece a los autores de proyectos de ley la obligación de presentar en la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto con el fin de ser criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que se puedan encontrar.

Así las cosas, es preciso afirmar que no se configuran los beneficios particular, actual y directo de los que trata el artículo 286 de la ley 5 de 1992, modificado por el artículo 1 de la ley 2003, según los cuales se debe confirmar que i) la decisión pueda afectar de manera positiva mediante la asignación de un beneficio económico, privilegio, ganancia económica, ii) de manera directa al congresista de la república, su cónyuge o compañera/o permanente o sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad o primero civil, iii) de manera actual y concreta al momento de la discusión y votación del proyecto, es decir, que no se trate de una ganancia futura o hipotética.

De acuerdo con el panorama esbozado atrás, un proyecto cuyo objeto es proteger los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la salud de los colombianos conforme a la Constitución Política de Colombia y a través de disposiciones y acciones que le permitan al Estado, a los individuos y a la sociedad promover buenas prácticas de cuidado, reducir riesgos y mitigar daños en los usos y consumos de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en el territorio, lo cual genera un beneficio que redunda en un interés general y sobre el cual tiene acceso el grueso de la sociedad sin discriminación alguna. Así las cosas, y tal como lo establece el artículo 286 del reglamento del Congreso, no habrá conflicto de interés *cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.* De manera que para ningún caso considero que se generen conflictos de interés.

De los honorables Congresistas,

|  |  |
| --- | --- |
| **DANIEL CARVALHO MEJÍA**  Representante a la Cámara por Antioquia | **HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA**  Senador de la República  Coalición Alianza Verde Centro Esperanza |
| **JUAN CARLOS LOZADA VARGAS**  Representante a la Cámara por Bogotá  Partido Liberal Colombiano | **JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ GONZÁLEZ**  Representante a la Cámara por Caldas  Nuevo Liberalismo |
| **JENNIFER PEDRAZA SANDOVAL**  Representante a la Cámara por Bogotá  Partido Dignidad | **JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES**  Representante a la Cámara por Boyacá  Partido Alianza Verde |
| **KATHERINE MIRANDA**  Representante a la Cámara  Partido Alianza Verde | **ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  Representante a la Cámara por Risaralda  Partido Alianza Verde |
| **DUVALIER SÁNCHEZ ARANGO**  Representante a la Cámara por el Valle del Cauca  Partido Alianza Verde | **OLGA LUCÍA VELÁSQUEZ**  Representante a la Cámara Bogotá  Partido Alianza Verde |
| **CRISTIAN DANILO AVENDAÑO FINO**  Representante a la Cámara Santander  Partido Alianza Verde | **ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA**  Representante a la Cámara  Partido Alianza Verde |
| **JULIA MIRANDA LONDOÑO**  Representante a la Cámara por Bogotá  Partido Nuevo Liberalismo |  |

1. Sentencia Corte Constitucional C-574 del 2011 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sentencia Corte Constitucional C-253 de 2019 [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de casación penal SP025-2019 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2016. *Recuperado de:* <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/Abece-salud-mental-psicoactivas-octubre-2016-minsalud.pdf>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Los tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas suscritos por Colombia son: Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Convenio sobre Sustancias sicotrópicas de 1971 y la Convención de Las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. [↑](#footnote-ref-5)
6. Decretos reglamentarios de la Ley 1787 de 2016 la cual tiene como objeto crear un marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional colombiano. [↑](#footnote-ref-6)
7. Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, 2018. *Recuperado de*: <https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/08/2018-Report-Informe-Dossier-de-prensa-SPA.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
8. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2021. *Recuperado de*: <https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2020/2021_06_24_informe-mundial-sobre-las-drogas-2021-de-unodc_-los-efectos-de-la-pandemia-aumentan-los-riesgos-de-las-drogas--mientras-la-juventud-subestima-los-peligros-del-cannabis.html> [↑](#footnote-ref-8)
9. Ministerio de Salud de Colombia. 2012. Guía Práctica para entender los derechos en salud y la atención integral de las personas que consumen sustancias psicoactivas. [↑](#footnote-ref-9)
10. Proyecto de Ley PL 223-21C, Cámara de Representantes de Colombia. [↑](#footnote-ref-10)
11. Disposición declarada INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional en la Sentencia C-221 de 1994, protegiendo el Derecho al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía del individuo y el derecho a la igualdad. Esta icónica sentencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz argumentó que la conducta del consumidor no afecta, en sí misma, los derechos de las otras personas. [↑](#footnote-ref-11)